



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Dirección General de Inversiones y
Desarrollo Local
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Exp.: A/OBR-021972/2022

MUNICIPIO: Quijorna

ACTUACIÓN: "Obras de urbanización calles Virgen del Pilar, Nabera y Santa Ana. Fase 1"

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (prorrogado)

ASUNTO: Tramitación anticipada. Procedimiento abierto simplificado. Pluralidad de criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 239.267,30 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 197.741,57 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE OBRA, "OBRAS DE URBANIZACION CALLES VIRGEN DEL PILAR, NABERA y SANTA ANA. FASE 1" EN EL MUNICIPIO DE QUIJORNA

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4 LCSP, que establece que:

"4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso".*

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 159.1 LCSP:

"1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, ...

- b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

En el caso de la contratación que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos, pues el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecución material, los gastos generales y el beneficio industrial, pero no el IVA y dado que no se prevén modificados ni prórrogas, asciende a **197.741,57 euros**, siendo por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros y adicionalmente, no se prevé ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor, por lo que procede la contratación siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los artículos 145 y 146.2 LCSP, los criterios elegidos para la adjudicación, que permiten una mejora en las condiciones para la Administración, son los siguientes:

1. Criterio relacionado con los costes: el precio. Ponderación: 70%.

La fórmula elegida para valorar el precio ofertado pone en relación cada oferta con las restantes, otorgándose 70 puntos a la oferta más baja, y asignando la puntuación al resto de ofertas proporcionalmente, según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = \frac{70 \times \text{Oferta más baja}}{\text{Oferta a valorar}}$$

Se ha optado por esta fórmula, porque distribuye de manera directamente proporcional los 70 puntos en función de las ofertas presentadas, otorgando 70 puntos a la oferta más baja. De esta forma, la diferencia de puntuación entre las ofertas presenta menores diferencias cuantitativas que si la fórmula se expresara en función de las bajas (PBL – oferta), ya que en este caso las ofertas más cercanas al PBL, obtendrían puntuaciones cercanas a 0. Esta mayor diferencia cuantitativa otorgaría al criterio precio una incidencia mayor en el cómputo global en detrimento del resto de criterios. En consecuencia, la formulación en función de las ofertas que se ha elegido permite que las ofertas con mejor relación calidad/precio obtengan las mejores puntuaciones.

2. Ampliación del plazo de garantía definitiva (máx. 30 puntos)

Por cada 2 meses de ampliación del plazo de garantía definitiva, adicionales al plazo de 1 año para la ejecución de la obra, se otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

Por 2 meses adicionales	10 puntos
Por 4 meses adicionales	20 puntos
Por 6 meses adicionales	30 puntos

Habiéndose establecido un plazo de garantía para la realización de la obra de un año, se ha elegido este criterio porque la ampliación del período de tiempo en que las mencionadas obras estén cubiertas por la garantía definitiva garantiza una mayor calidad en la obra a contratar, al responder ésta de la inexistencia de vicios o defectos de las obras ejecutadas, durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato, según establece el art. 110 LCSP. La ampliación máxima que se contempla, de 6 meses, se considera adecuada y proporcional al objeto del contrato.

Total criterios adjudicación: 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, el señalado con el número 1, ya que dicho criterio es el único que se considera relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. Para apreciar dicha circunstancia se estará a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21 de octubre de 2019.

Por lo tanto, se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Cuando concorra 1 solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%.
- Cuando concurren 2 licitadores, la que sea inferior en más del 20% a la otra oferta.
- Cuando concurren 3 licitadores, las que sean inferiores en más del 10 % a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más del 10 % a dicha media.
- Cuando concurren 4 o más licitadores, las que sean inferiores en más del 10 % a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del 10 %, se procederá al cálculo de una nueva meda sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En cuanto a la documentación técnica a presentar por los licitadores en relación con los criterios de adjudicación del contrato será el Anexo I: Modelo de Oferta del Pliego de Cláusulas Particulares, en el que se expresará el precio y la ampliación del plazo de

garantía definitiva, que se incluirán en el Sobre nº 2.

No se establecen parámetros para considerar la oferta anormalmente baja en relación con el criterio de ampliación del plazo de garantía, al no considerarse un factor determinante que pudiera comprometer la viabilidad de la oferta y de la ejecución del contrato. Asimismo, la asignación de puntos ya contiene un límite.

2. CLASIFICACIÓN. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

2.1 CLASIFICACIÓN

No se exige clasificación de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. artículo 77.1.a) LCSP).

No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.1.a) LCSP: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato”.

Clasificación alternativa del contratista: Grupo G Subgrupo 6 Categoría 2

2.2 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para los empresarios no españoles miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, la solvencia económica y financiera y la técnica y profesional, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 88 LCAP.

Atendiendo a las características y al valor estimado del contrato, la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica y profesional de los licitadores, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el artículo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditación, quedando así fijada la solvencia con precisión, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que produzca efectos de carácter discriminatorio.

Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la ejecución del mismo.

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y que se justifican en la presente memoria, o mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo y subgrupo de clasificación correspondiente al contrato.

A continuación, se exponen los criterios de solvencia que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato.

Acreditación de la solvencia económica y financiera

Se ha optado por establecer el criterio señalado en el artículo 87.1 a) Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el que se regula la acreditación por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados

con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El órgano de contratación indicará las principales razones de la imposición de dicho requisito en los pliegos de la contratación o en el informe específico a que se refiere el artículo 336.

Criterio de selección:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, debe alcanzar el importe de 296.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 197.741,57 euros, el importe mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 296.612,36 euros.

Acreditación documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditación de la solvencia técnica que se considera más adecuado, dadas las características del contrato, es el previsto en el artículo 88.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, si bien se contempla, de acuerdo con lo previsto en el artículo 88.2, un medio distinto para las empresas de nueva creación.

1. Empresas con antigüedad igual o superior a 5 años:

Acreditación de la solvencia técnica. Artículo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas más de cinco años antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio

contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de selección:

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado en el año de mayor ejecución de los últimos 5 años en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, será igual o superior a 138.450,00 euros.

Acreditación documental:

Relación firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras donde se precise si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relación se acreditarán:

- Mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.
- Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por el empresario destinatario de la obra o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable del empresario.

Los certificados de buena ejecución incluidos en la relación cuyo destinatario fuera una entidad del sector público, podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habrá de informar por escrito de tal circunstancia al órgano de contratación, indicando la entidad contratante a la que ha solicitado la comunicación directa entre Administraciones Públicas y una dirección electrónica de contacto de dicha entidad.

2. Empresas con antigüedad inferior a 5 años:

Artículo 88.1 de la LCSP, apartado b): Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras acompañadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un responsable de las obras con titulación mínima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o titulaciones asimilables, con una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión y dos peones especializados.

Acreditación documental:

Declaración responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de este personal, acompañada de la documentación acreditativa de tal extremo. Además, para el personal responsable de obra, la experiencia mínima de tres años se acreditará con certificados de la participación de estos trabajadores en obras de igual naturaleza que la que constituye el objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de ejecución de las obras.

Se incluirá, asimismo, copia de la titulación universitaria exigida al responsable de obra.

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), se establece como condición especial de ejecución de carácter social que el adjudicatario deberá emplear durante la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situación legal de desempleo, según lo establecido en el artículo 267 del Texto Refundido la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Esta obligación se hace extensible al personal contratado por las empresas subcontratistas que puedan participar en la ejecución.

A efectos de su comprobación, el contratista debe presentar mensualmente, junto a la certificación, una relación del personal que ha participado en su ejecución, tanto por parte de la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo de contrato y fecha de celebración.

Esta condición especial no supone un incremento del coste del contrato y tendrá la consideración de **esencial** y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato a los efectos del artículo 211.1.f) de la LCSP.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANUALIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 3 de marzo de 2022 de la Dirección General de Presupuestos, relativa a la gestión presupuestaria para 2022, en esta memoria se justifica la necesidad de comprometer anualidades futuras en relación con el contrato que se propone, relativo a la actuación "Obras de urbanización calles virgen del Pilar, Nabera y santa Ana. fase 1" en el municipio de Quijorna, incluida en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (PRORROGADO).

El plazo de ejecución de las obras establecido en el Proyecto es de 3 meses. Teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos y los plazos de tramitación para la licitación y el proceso de cierre contable del ejercicio presupuestario corriente, el inicio del contrato se prevé para el mes de abril de 2023.

Se configura el expediente como de tramitación anticipada, sometido a la condición suspensiva, de forma que la adjudicación queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2023.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitación se ha calculado en base al presupuesto de ejecución del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 233 d) LCSP, los proyectos de obra deberán comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado artículo e incluye un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto está ordenado por obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP): “El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2. Se considerarán costes directos:

- a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

- d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

3. Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e indirectos y entre los costes directos, señaladamente, los de personal que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecución material, definido en el artículo 131 RGLCSP, como el resultado obtenido de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de **166.169,39 euros**.

Asimismo, el presupuesto base de licitación, conforme a lo establecido en el artículo 100 LCSP y 131 RGLCSP, se obtiene incrementado el de ejecución material con los gastos generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecución material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un importe de **21.602,02 euros**.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecución material un porcentaje del 6% en concepto de beneficio industrial, en este caso, **9.970,16 euros**.

Obtenemos así un presupuesto de **197.741,57 euros**, al que hay que aplicar el tipo impositivo vigente, del impuesto sobre el valor añadido, conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho tipo es del 21%, con un importe de IVA de **41.525,73 euros**.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitación, que conforme dispone el artículo 100 LCSP es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El presupuesto base licitación de este contrato son **239.267,30 euros**.

Según lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1	LEVANTADOS Y DEMOLICIONES	30.596,73
2	PAVIMENTACIÓN	97.324,76
3	RED DE SANEAMIENTO UNITARIO	3.898,13
4	MOBILIARIO URBANO	2.289,98
5	SEÑALIZACIÓN	6.752,23
6	GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN	21.101,67
7	SEGURIDAD Y SALUD	4.205,89
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	166.169,39
	13% Gastos Generales	21.602,02
	6% Beneficio Industrial	9.970,16
	Suma de G.G. y B.I.	41.525,73
	BASE IMPONIBLE	197.741,57
	21% IVA	41.525,73
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	239.267,30

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni su prórroga, de ahí que el valor estimado del contrato, definido en el artículo 101 LCSP para estos contratos como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, es de **197.741,57 euros**.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecución de la obra previsto en el proyecto de ejecución, que es de 3 meses, se prevé la ejecución de la misma en el ejercicio 2023.

Por último, el artículo 116.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que: “si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Quijorna contaba con una población en 2015 de 3.196 personas (2015 es el año que ha de considerarse para el cálculo de la población a los efectos de la cofinanciación del PIR 2016-2019). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 75/2016 por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional 2016-2019, los municipios con población inferior a 2.500 habitantes no deben aportar cofinanciación al Programa; a sensu contrario, el porcentaje de cofinanciación que aporta el Ayuntamiento de Quijorna es del 0,9901%, correspondiendo a la Comunidad de Madrid la financiación del 90,0099 % restante.

El gasto se efectuará con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid imputándose a la aplicación presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto: 2022/001124.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se expone a continuación la justificación de la no división en lotes del objeto de este contrato:

La ejecución del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de forma óptima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la Dirección Facultativa, cuestión que podría verse imposibilitada si su ejecución se encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecución del contrato. Diariamente, durante la ejecución de la obra surgen incidencias o se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de carácter inmediato por parte del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista económico, para adoptar la más adecuada, de conformidad con el criterio de la Dirección Facultativa a la que, obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaría su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, pudiendo dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecución de la obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe añadirse a lo anterior, la conveniencia de una única respuesta a la entrega al uso público, así como a la subsanación de los defectos observados que puedan deberse a deficiencias en la ejecución de la obra durante el plazo de garantía establecido, sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolución podrían alargarse en el tiempo, con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalación y, en definitiva, para sus posibles usuarios.

7. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales que puedan

sufrir terceros, durante la ejecución de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantía definitiva en favor de la Administración, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.
- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
- e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la mejor satisfacción del interés de la Administración en la ejecución del contrato y en la protección de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuación del contratista en la realización de la obra. Por estas razones, se considera apropiado exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el día de la fecha

**EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL**

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUÍN
Fecha: 2022.12.09 12:26